

Asunto: Respuesta solicitud de acceso a la información.

Maestra
Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña,
Titular de la Unidad de Transparencia
del Poder Ejecutivo.
Presente.

At'n. Licda. Perla Viridiana Tovar Ornelas.

En atención a la solicitud de acceso a la información con número de **Folio 61449** que a la letra dice: **«¿Quiero saber las asesorías que han brindado los siguientes asesores de la comisión estatal de atención integral a víctimas, el número de acompañamientos del 01 de Enero del 2022 al 30 de Octubre del 2024, denuncias que tengan dichos asesores, procedimientos y además saber la efectividad de dichos asesores, de los asesores jurídicos que quiero la información única y exclusivamente son: ¿ Román Valdivia Ortega, Francisco Ornar Ramírez Escobedo, Diana Karina Sánchez Gómez, Diego Isaac Licea Pegueros, Gerardo Juvenal Jiménez Alemán, Luz Elizabeth Monjaraz Guerrero, Oscar Leonardo Hernández Vázquez, Karla Maurilia López Lomelí y ¿Héctor Adán Gutiérrez Delgado...».** (SIC)

Al respecto, la Secretaría de la Honestidad para cada uno de los puntos informa lo siguiente:

En relación con **«¿Quiero saber las asesorías que han brindado los siguientes asesores de la comisión estatal de atención integral a víctimas, el número de acompañamientos del 01 de Enero del 2022 al 30 de Octubre del 2024 [...] saber la efectividad de dichos asesores...».** (SIC)

Respuesta: Sobre el particular, esta Secretaría de la Honestidad comunica que **no se tiene la posibilidad de proporcionar la información solicitada**, debido a que no forma parte de la información y documentación que genere, obtenga, adquiera, transforme o posea esta Secretaría conforme a sus atribuciones legales y reglamentarias en términos del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. En razón de ello, no se tiene la posibilidad de brindar lo solicitado.

Finalmente, en relación con **«¿Quiero saber [...] del 01 de Enero del 2022 al 30 de Octubre del 2024, denuncias que tengan dichos asesores, procedimientos...».** (SIC)

Respuesta: Esta Secretaría de la Honestidad, previo a dar respuesta debe señalar que el 26 de septiembre de 2024 entró en vigor, el Decreto Legislativo número 345, publicado el 17 de septiembre de 2024 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, número 187, Sexta Parte, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, donde la **Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas cambia su denominación a Secretaría de la Honestidad**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 fracción XI y Sexto Transitorio de la citada Ley Orgánica. En virtud de ello, las referencias realizadas a la Secretaría de la Honestidad en el presente documento, se entenderán respecto de la otrora Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, denominación vigente previo a la entrada en vigor del señalado Decreto Legislativo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracciones II, III, IV, XX y XXII, 9 fracciones I y II, y 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD

Asunto: Respuesta solicitud de acceso a la información.

actualmente denominada **Secretaría de la Honestidad y los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal**, se encuentran legalmente facultados para **investigar las faltas administrativas** imputables a servidores públicos y particulares a través de las **Autoridades Investigadoras** que reglamentariamente tengan conferida dicha atribución, así como **substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa** por faltas no graves, e inclusive substanciar y remitir para su resolución al Tribunal de Justicia Administrativa los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves, por medio de la **Autoridad Substanciadora / Resolutora** que reglamentariamente tiene conferida la respectiva atribución.

Así también, se puntualiza que los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el caso en particular, el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de Control Interno, facultad a cargo de esta Secretaría de la Honestidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 fracción I inciso g) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, por lo que para efectos de la atención del folio en cita, esta Secretaría de la Honestidad da respuesta en lo que concierne a sus Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras, así como en lo tocante al Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

En esta tesitura, esta Secretaría de la Honestidad informa que en relación al periodo **en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024**, no se tiene la posibilidad de proporcionar lo peticionado, en razón de que es información clasificada como confidencial, conforme al resolutivo **RCT_3436_2024** del 13 de noviembre de 2024, emitido por el Comité de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, por lo que no es posible informar **la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa** iniciados en contra de **Román Valdivia Ortega, Francisco Ornar Ramírez Escobedo, Diana Karina Sánchez Gómez, Diego Isaac Licea Pegueros, Gerardo Juvenal Jiménez Alemán, Luz Elizabeth Monjaraz Guerrero, Oscar Leonardo Hernández Vázquez, Karla Maurilia López Lomelí y Héctor Adán Gutiérrez Delgado**, tramitados por las **Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad**, tampoco es posible informar sobre la existencia e inexistencia de denuncias recibidas respecto a las personas en cita, en el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 cuarto párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, sólo son del conocimiento público las sanciones que hayan causado estado, impuestas por faltas administrativas graves que contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, con motivo de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ende, al no actualizarse ese supuesto, no se tiene la posibilidad de proporcionar la información solicitada..





GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD

Asunto: Respuesta solicitud de acceso a la información.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado en la siguiente tesis aislada, con registro digital: 191967, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. LX/2000), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, abril de 2000, página 74, registrada bajo el siguiente **DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS**, que a la letra dice:

«DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. - El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.»

En este sentido, aún y cuando se hubiesen presentado denuncias o instaurado procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de personas señaladas como servidoras públicas, si éstas no derivan en un procedimiento de responsabilidad administrativa por la comisión de una falta grave y traiga como consecuencia la aplicación de la sanción de inhabilitación, se tiene la obligación de proteger a las personas para que no sean objeto de discriminación que atente contra su dignidad humana, que menoscabe su honor, intimidad, imagen, derechos y libertades, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 1º párrafos segundo, tercero y quinto; 6º inciso A) fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el numeral 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; y el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Derechos que, en su caso, se verían vulnerados al brindar los documentos que se solicitan.

Lo expuesto, tiene sustento en la tesis aislada, con registro digital: 2002742, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. LXII/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, página 798, registrada bajo el siguiente rubro **DERECHO AL HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL**, que a la letra dice:

«DERECHO AL HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XX/2011 (10a.), de rubro "DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN





GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD

Asunto: Respuesta solicitud de acceso a la información.

SUBJETIVA Y OBJETIVA.", sostuvo que el derecho al honor tiene una dimensión objetiva o externa, conforme a la cual éste puede definirse como el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros. En esta dimensión, el derecho al honor ampara la buena reputación de una persona en sus cualidades morales y profesionales, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena, al ir en su descrédito o menosprecio. Por lo mismo, esta Primera Sala estima que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor. En esos supuestos, los mensajes absolutamente vejatorios de una persona, se dirigen contra su comportamiento en el ámbito en el que desempeña su labor u ocupación, pudiendo hacerle desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad y daño que si la descalificación estuviese dirigida directamente a su persona o sus cualidades morales. Esto es así porque la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás llegasen a pensar de una persona, pudiendo repercutir tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga. No obstante, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse sin más con un atentado contra el honor, ya que el no ser en la consideración de un tercero un buen profesional o el idóneo para realizar determinada actividad no constituye per se un ataque contra su honor. Las críticas a la aptitud profesional de otra persona serán lesivas del derecho al honor cuando, sin ser una expresión protegida por la libertad de expresión o el derecho a la información, constituyan: una descalificación de la probidad profesional de una persona que pueda dañar grave e injustificada o infundadamente su imagen pública, o críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, en el fondo impliquen una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales.»

La respuesta se emite con fundamento en los artículos 47 y 48 fracciones II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, 1, 4 fracción I inciso b, numeral b.5, 5, 10 fracción VI, 14 fracción V y 18 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Sin otro particular por el momento, quedo a la orden.

Atentamente.

Guanajuato, Gto., noviembre 14, 2024.

La Directora de Enlace e Información,

Licda. Laura Elena López Mata.



**PODER EJECUTIVO
GUANAJUATO**

**SECRETARÍA DE LA
TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

